Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **07398/INFOEM/IP/RR/2022**, interpuesto por **XXX XXX XXX**, en lo sucesivo, el **RECURRENTE**; en contra de la respuesta de la **Secretaría de la Contraloría**, en adelante, el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El **veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós**, el entonces **SOLICITANTE** presentóa través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la solicitud de información pública registrada con el número **00064/SECOGEM/IP/2022,** mediante la que requirió lo siguiente:

*“Solicito conocer si el personal que labora en el órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se encuentra titulado y con cédula profesional, solicitando a su vez la evidencia documental que acredite la obtención de dichos documentos por la totalidad del personal que labora actualmente en esa oficina. A su vez, señalar en su caso, que personal de dicho órgano interno de control se encuentra contratado con horas semana mes y/o profesos de tiempo completo, señalando nombre completo, percepción mensual, fecha de contratación por parte de la Universidad y funciones que realizan. Solicito también se señale cuantas, cuales (incluyendo tipo y número de auditoría) ha realizado el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante el periodo de enero 2017 a marzo 2022, indicando la persona que las realizó, así como el número de observaciones determinadas, cuantas de estas fueron concluidas y cuantas se turnaron a responsabilidades o investigación. Se me informe cuantas quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación, ha recibió el órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl durante el periodo del 01 de enero de 2017 al 23 de marzo de 2022, señalando el abogado responsable de su ejecución y el estado de cada una de estas actuaciones. En su caso el monto observado o aclarado y el servidor público sancionado o sujeto a investigación.”* (Sic).

1. Se hace constar que la particular señaló como modalidad de entrega de la información: ***correo electrónico***.
2. El **veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós**, el **SUJETO OBLIGADO** comunicó una incompetencia parcial para atender la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022**, en los siguientes términos:

*“Sírvase encontrar en archivos adjuntos, en formato pdf, oficio de respuesta y acuerdo de orientación parcial, signados por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Titular de la Unidad de Transparencia.*

*ATENTAMENTE*

*MTRO. MARCO ANTONIO BECERRIL GARCÉS”* (Sic)

1. Adjunto a su manifestación de incompetencia parcial, el **SUJETO OBLIGADO** presentó los documentos que se resumen en seguida:
   1. ***“ACUERDO DE ORIENTACIÓN\_1.PDF”***: Documento de cinco fojas consistente en el Acuerdo de veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós, sin folio único de identificación, emitido por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Titular de la Unidad de Transparencia, por el que orienta al particular a dirigir la primera parte de su solicitud de información a la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**.
   2. ***“OFICIO DE RESPUESTA\_1.PDF”***: Documento de una foja consistente en el oficio de veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós, sin folio único de identificación, emitido por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Titular de la Unidad de Transparencia, por el que notifica el Acuerdo de Orientación Parcial hacia la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**.
2. El **veinte (20) de abril de dos mil veintidós**, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*SIRVASE ENCONTRAR EN ARCHIVOS ADJUNTOS, EN FORMATO .PDF, OFICIO DE RESPUESTA SIGNADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO EL OFICIO SIGNADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO QUE ATENDIO EL REQUERIMIENTO.*

*ATENTAMENTE*

*MTRO. MARCO ANTONIO BECERRIL GARCÉS”* (Sic.)

1. Adjunto a su acuse de respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** presentó el siguiente archivo electrónico:
   1. ***“OFICIO DE RESPUESTA UT\_1.PDF”***: Documento de dos fojas consistente en el oficio de veinte (20) de abril de dos mil veintidós, sin folio único de identificación, emitido por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que ofrece la respuesta del Servidor Público Habilitado que atendió los requerimientos.
   2. ***“RESPUESTA.zip”***: Carpeta comprimida que contiene los siguientes archivos:
      1. ***“OFICIO DE RESPUESTA SPH.pdf”***: Documento de cuatro fojas consistente en el oficio número 210C0301000400S/111/2022, de quince (15) de abril de dos mil veintidós, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por el que se pronuncia respecto de cuatro requerimientos formulados en la solicitud **00064/SECOGEM/IP/2022**.
      2. ***“ANEXO.jpeg”***: Archivo de imagen consistente en la fotografía tomada al anverso de la cédula profesional número 3347919, expedida por la Secretaría de Educación Pública.
2. Derivado de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, el **nueve (09) de mayo de dos mil veintidós**, el particular interpuso el recurso de revisión **07398/INFOEM/IP/RR/2022**; impugnación en la que refirió lo siguiente:

* **Acto impugnado:** “*Se nos presenta una respuesta donde se niega la información. Lo anterior lo podemos acreditar ya que en esta solicitud con numero de folio 00064/SECOGEM/IP/2022 Se nos hace entrega del oficio 210C0301000400S/111/2022, a por el cual el Lic. Daniel Isaac Perez Martinez señala que no puede entregar la información en lo referente a que si el personal del órgano interno de control se encuentra titulado y con cédula profesional, ya que dicho servidor publico en su oficio de respuesta señala el no poder entregar la información porque a su decir el personal es contratado por la Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl. Respecto a la forma de contratación del personal, señala que no puede entregar la información por no corresponder a su área y así sucesivamente en cada uno de los puntos de nuestra solicitud de información. A lo anterior, existe una contradicción en su actuar ya que en otra solicitud con numero de folio 00019/UTNEZA/IP/2022 el mismo servidor publico señalo en su escrito con numero 210C0301000400S/087/2022 argumento que, los órganos internos de control, al depender de la Secretaria de la Contraloría, no pueden proporcionar información a la dependencia, en este caso, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Por lo anterior, se puede observar que dicho servidor público ni a través de una solicitud realizada a la Secretaría de la Contraloría de donde a su decir depende, ni de una solicitud a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a donde se encuentra adscrito, ha proporcionado información, por lo que ha limitado nuestro derecho publico de conocer los hechos que esa autoridad administrativa desarrolla.”* (Sic)
* **Razones o motivos de inconformidad:** “*Se nos presenta una respuesta donde se niega la información. Lo anterior lo podemos acreditar ya que en esta solicitud con numero de folio 00064/SECOGEM/IP/2022 Se nos hace entrega del oficio 210C0301000400S/111/2022, a por el cual el Lic. Daniel Isaac Perez Martinez señala que no puede entregar la información en lo referente a que si el personal del órgano interno de control se encuentra titulado y con cédula profesional, ya que dicho servidor publico en su oficio de respuesta señala el no poder entregar la información porque a su decir el personal es contratado por la Universidad Tecnologica de Nezahualcoyotl. Respecto a la forma de contratación del personal, señala que no puede entregar la información por no corresponder a su área y así sucesivamente en cada uno de los puntos de nuestra solicitud de información. A lo anterior, existe una contradicción en su actuar ya que en otra solicitud con numero de folio 00019/UTNEZA/IP/2022 el mismo servidor publico señalo en su escrito con numero 210C0301000400S/087/2022 argumento que, los órganos internos de control, al depender de la Secretaria de la Contraloría, no pueden proporcionar información a la dependencia, en este caso, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Por lo anterior, se puede observar que dicho servidor público ni a través de una solicitud realizada a la Secretaría de la Contraloría de donde a su decir depende, ni de una solicitud a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a donde se encuentra adscrito, ha proporcionado información, por lo que ha limitado nuestro derecho publico de conocer los hechos que esa autoridad administrativa desarrolla.”* (Sic)

1. Adjunto al recurso de revisión antes enunciado, el ahora **RECURRENTE** presentó los siguientes archivos electrónicos:
   1. ***“Respuesta 019 SAIMEX 2022 (1).pdf”***: Documento de tres fojas consistente en el oficio número 210C0301000400S/087/2022, de veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por el que se pronuncia respecto de una solicitud de información diversa a la que dio origen al recurso de revisión **07398/INFOEM/IP/RR/2022**.
   2. ***“OFICIO DE RESPUESTA SECOGEM.pdf”***: Documento de tres fojas consistente en el oficio número 210C0301000400S/111/2022, de quince (15) de abril de dos mil veintidós, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, originalmente entregado en respuesta a la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022**.
2. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente **07398/INFOEM/IP/RR/2022**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, con el objeto de su análisis.
3. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de **diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX, a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el Informe Justificado procedente.
4. El veinte (20) de mayo de dos mil veintidós, el **SUJETO OBLIGADO** presentó su informe justificado a través de los siguientes archivos electrónicos:
   1. ***“INFORME JUSTIFICADO 07398-INFOEM-IP-RR-2022\_1.PDF”***: Documento de 31 fojas consistente en el oficio de veinte (20) de mayo de dos mil veintidós, sin folio único de identificación, emitido por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que presenta su informe justificado, mediante el cual confirma esencialmente su respuesta inicial.
5. El **diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós**, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se notificó que el plazo de 30 días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de 15 días hábiles adicionales.
6. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del dos mil veintidós; que, en comparación con los recibidos el año pasado, y en el mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400% el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto. Circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
7. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la Ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
8. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
9. En ese sentido, el Legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
10. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
    1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
    2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
    3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
    4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
11. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
12. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”[[1]](#footnote-2)*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
13. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
14. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.*** *“A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.”[[2]](#footnote-3)*

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*** *“En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.”[[3]](#footnote-4)*

1. Por ello, este Organismo Garante, comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.
2. El **once (11) de julio de dos mil veintitrés**, los archivos electrónicos presentados por el **SUJETO OBLIGADO,** en vía de Informe Justificado, se pusieron a la vista del **RECURRENTE**, concediéndole un plazo de tres (03) días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con el artículo 185, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; no obstante, se hace constar que el particular no ejerció su derecho de réplica sobre los nuevos contenidos.
3. Finalmente, el **veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción, por lo que ordenó turnar el expediente para su resolución, misma que ahora se pronuncia; y ------------------------

# **C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

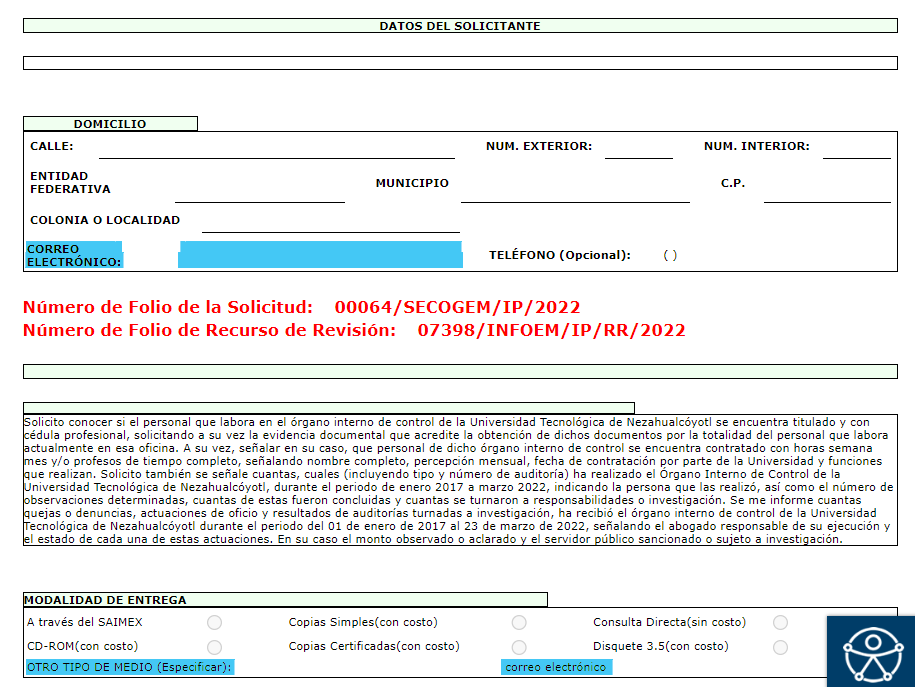
1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios**.**

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX**,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el **veinte (20) de abril de dos mil veintidós**, el plazo para interponer el recurso de revisión trascurrió del **veintiuno (21) de abril** al **doce (12) de mayo de dos mil veintidós**; sin contemplar en el cómputo los sábados, domingos y días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Luego entonces, si el hoy **RECURRENTE** presentó el recurso de revisión con número **07398/INFOEM/IP/RR/2022** el **nueve (09) de mayo de dos mil veintidós**, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en la Ley de la materia.
3. Por otro lado, de la revisión al expediente electrónico contenido en el SAIMEX**,** se desprende que la parte solicitante, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública en los expedientes que se revisan, tanto en las solicitudes de información como en los recursos de revisión, **no señaló su nombre, ni se tiene certeza de su identidad**; sin embargo, es importante señalar que el nombre de los Solicitantes y Recurrentes no es un requisito indispensable para la tramitación del acto procesal específico en materia de acceso a la información, ello en estricto apego al numeral 155 párrafo tercero de la Ley de la materia, en concatenación con el 180 del mismo ordenamiento.
4. Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracciones III y IV de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; 5, párrafos vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, fracciones III, IV y V, de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, además de que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal y Local.
5. Por lo cual, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al Solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
6. Asimismo, como lo establece la Convención Americana en su artículo 13, el derecho de acceso a la información es un derecho humano universal y en consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información.
7. De igual forma, la Corte Interamericana ha precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención Americana.
8. Luego entonces, el nombre del **SOLICITANTE** y subsecuente **RECURRENTE** no puede ser considerado un requisito indispensable de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, ya que el acceso a la información no está condicionado a acreditar algún interés, ya sea jurídico o legítimo, máxime que es un elemento subsanable por este Órgano Resolutor.
9. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.**

1. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que **el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de** simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, **auxilio y orientación a los particulares**, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
2. De tal manera que cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través del sistema electrónico o de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Instituto o por el Sistema Nacional de Transparencia[[4]](#footnote-5).
3. Para presentar una solicitud de información por escrito, no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes[[5]](#footnote-6):
   1. Nombre del solicitante, o en su caso, los datos generales de su representante;
   2. Domicilio o en su caso correo electrónico para recibir notificaciones;
   3. La descripción de la información solicitada;
   4. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información; y
   5. **La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información**, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.
4. Como se ha establecido en el Considerando anterior, las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del Sujeto Obligado ante quien se presente[[6]](#footnote-7). De hecho, la Ley reconoce que no solo el nombre del solicitante, sino también el rubro relativo a cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información, será opcional, por lo que en ningún caso este podrá ser un requisito indispensable para la procedente de la solicitud[[7]](#footnote-8).
5. No obstante, por cuanto hace a la modalidad en la que se prefiera que se otorgue el acceso a la información, resulta indispensable su señalamiento, pues consiste en el medio por el que el Sujeto Obligado encargado de recibir y atender la solicitud, hará entrega de la información que se requiera.
6. En el presente asunto, de las constancias que obran en el expediente digital formado en el SAIMEX, específicamente en la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022**, se advierte que en el apartado relativo a la *MODALIDAD DE ENTREGA*, el entonces **SOLICITANTE** señaló que deseaba recibir la información vía ***correo electrónico***; sin embargo, omitió agregar su dirección de correo, tal como lo muestra la siguiente imagen:



1. Así las cosas, toda vez que el entonces **SOLICITANTE** no refirió el correo electrónico específico al que deseaba que le fuera remitida la información, con base en lo establecido por el artículo 13[[8]](#footnote-9) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y en seguimiento al principio de **eficacia[[9]](#footnote-10)** que rige el funcionamiento de este Organismo Garante, se determina que la modalidad de entrega de la información sea ***a través del SAIMEX***.
2. Lo anterior, con el fin de asegurar el ejercicio del derecho de acceso a la información del particular, aunado a que el establecer la entrega de información por medio del SAIMEX, permite que el **RECURRENTE** pueda consultarla tantas veces considere necesario por medio de su cuenta de usuario individual.

**CUARTO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se requirió conocer diversa información relacionada con el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a saber: **a)** Conocer si el personal adscrito al área administrativa se encuentra titulado y con cédula profesional, junto con los documentos que lo acrediten; **b)** Del personal contratado por horas, semana, mes y tiempo completo, señalar su nombre completo, percepción mensual, fecha de contratación y funciones que realizan; **c)** Informe cuántas auditorías ha realizado a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante el periodo comprendido de enero de dos mil diecisiete a marzo de dos mil veintidós, y señale la persona que las realizó, el número de observaciones determinadas y, de éstas, cuántas fueron concluidas y cuántas se turnaron a responsabilidades o investigación; y, **d)** Informe cuántas quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación, ha recibido el área administrativa desde el uno (01) de enero de dos mil diecisiete al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós, junto con nombre del abogado responsable de su ejecución , el estado de cada una de estas actuaciones, el monto observado o aclarado (en su caso) y el nombre del servidor público sancionado o sujeto a investigación.
2. El **SUJETO OBLIGADO** entregó la cédula profesional del Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Adjunto al documento anterior, se entregó un oficio del Titular del Órgano Interno de Control de la universidad por el que informó que el personal adscrito al área administrativa a su cargo había sido contratado de forma directa por la propia universidad, por lo que era la propia institución la que contaba con la información del personal, así como la información relacionada con los horarios y nombres de su personal, percepciones, fechas de contratación y funciones; en lo relativo a las auditorías realizadas desde enero de dos mil diecisiete a marzo de dos mil veintidós, se señaló una dirección electrónica para consultar la información a través de su portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX); y, al final, informó que no se había recibido quejas o denuncias, actuaciones de oficio o resultados de auditorías turnadas a investigación desde el uno (01) de enero de dos mil diecisiete al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós.
3. El particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el recurso de revisión con número indicado al rubro, y en el que señaló por agravios, la negativa de la información; la negativa del Titular del Órgano Interno de Control para entregar la información referente a si el personal del área administrativa se encontraba titulado y con cédula profesional; y, que existía una contradicción por parte del Titular del Órgano Interno de Control, pues en una solicitud diversa, presentada a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, aquél había manifestado una imposibilidad de entregar la información al depender directamente de la Secretaría de la Contraloría.
4. En ese sentido, este Órgano Garante advierte que las razones o motivos de inconformidad manifestados por la **RECURRENTE** sugieren que la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con los principios contendidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea **accesible**, **congruente, confiable** y **expedita**.
5. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la respuesta y posterior informe justificado colman el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE** o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en los artículos 179, fracciones I, IV y/o XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y que se transcriben a continuación:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I.*** *La negativa a la información solicitada;*

*(...)*

***IV.*** *La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;*

*(…)*

***XIII.*** *La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y*

*(…)”*

## **QUINTO. Estudio y Resolución del asunto.**

**I. Del deber de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública.**

1. Es elemental precisar que este Órgano Garante parte del hecho que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México, por lo que al respecto el **SUJETO OBLIGADO** debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen, en consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** al señalar la obligación de “promover, **respetar**, proteger y **garantizar** los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra dicho derecho.
2. Por ende, se deduce que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano convencional y constitucionalmente reconocido; en consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo.
3. Así las cosas, podemos definir el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[10]](#footnote-11)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[11]](#footnote-12)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[12]](#footnote-13)* fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[13]](#footnote-14)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuyo objeto es establecer principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; en su artículo 176, establece que **el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública**, siendo éste el medio a través del cual, este Órgano Garante después de realizar el análisis al procedimiento de acceso a la información, podrá determinar la posible afectación y, de ser el caso, ordenar la reparación a la violación del derecho en cuestión.

**II. De la atención a la solicitud de información.**

1. Ahora bien, de la lectura a la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022**, y como fuera señalado en el *Planteamiento de la Litis* de esta resolución, se advierte que el entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información relacionada con el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl:
   1. Conocer si el personal adscrito al área administrativa se encuentra titulado y con cédula profesional, junto con los documentos que lo acrediten;
   2. Del personal contratado por horas, semana, mes y tiempo completo, señalar su nombre completo, percepción mensual, fecha de contratación y funciones que realizan;
   3. Informe cuántas auditorías ha realizado a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante el periodo comprendido de enero de dos mil diecisiete a marzo de dos mil veintidós, y señale la persona que las realizó, el número de observaciones determinadas y, de éstas, cuántas fueron concluidas y cuántas se turnaron a responsabilidades o investigación; y,
   4. Informe cuántas quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación, ha recibido el área administrativa desde el uno (01) de enero de dos mil diecisiete al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós, junto con nombre del abogado responsable de su ejecución, el estado de cada una de estas actuaciones, el monto observado o aclarado (en su caso) y el nombre del servidor público sancionado o sujeto a investigación.
2. Previo a la emisión de su respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** se manifestó parcialmente incompetente para generar, poseer o administrar la información solicitada, a través del Acuerdo de veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós, emitido por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual, señaló lo siguiente:

*“Ahora bien, contemplando el contexto de su requerimiento y una vez analizado, por lo que hace a los puntos de su solicitud consistentes en: "Solicito conocer si el personal que labora en el órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se encuentra titulado y con cédula profesional, solicitando a su vez la evidencia documental que acredite la obtención de dichos documentos por la totalidad del personal que labora actualmente en esa oficina. A su vez, señalar en su caso, que personal de dicho órgano interno de control se encuentra contratado con horas semana mes yo/ profesos de tiempo completo, señalando nombre completo, percepción mensual, fecha de contratación por parte de la Universidad y funciones que realizan..." (SIC); le comento que, la información puede estar en poder de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por lo que deberá dirigir una solicitud de información por lo que hace a estos puntos de su solicitud, a dicho Sujeto Obligado.*

*Dicho lo anterior, le comento que, si es su deseo, puede realizar su solicitud de información a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a través de su Unidad de Transparencia, con domicilio ubicado en: Circuito Universidad Tecnológica, Numero 10, Colonia Benito Juárez, México, Ciudad Nezahualcóyotl, Código Postal 57000, Teléfono: 5557169700 extensiones 2070 y 2063, Correo electrónico: joseIuis.teIIezutn.edu.mx, Horario de atención: De 9:00 a 18:00 horas.”* (Sic)

1. Posteriormente, en respuesta a la solicitud de información, se entregó el oficio número 210C0301000400S/111/2022, de quince (15) de abril de dos mil veintidós, emitido por el Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, dirigido al Jefe y Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, cuyo contenido elemental se transcribe a continuación:

*“Al respecto, por lo que hace a:*

*“…* ***1.*** *Solicito conocer si el persona (sic) que labora en el órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se encuentra titulado y con cédula profesional, solicitando a su vez la evidencia documental que acredite la obtención de dichos documentos por la totalidad del personal que labora actualmente en esa oficina …”*

*El personal de nivel administrativo que labora en el Órgano Interno de Control se encuentra contratado de manera directa por la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por lo que ese Organismo Desconcentrado es quien posee la información relacionada con la formación académica de las personas que en ella laboran.*

*Se aclara que la información y evidencia documental que obra en mi alcance, como Titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, atiende a documentación generada y/o relacionada con el objetivo de la propia oficina, el cual se encuentra especificado en el Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, publicado en Gaceta de Gobierno el 30 de julio del 2012; por lo cual, los título, cedulas, o demás “evidencia documental que acredite la obtención de dichos documentos, del personal que labora en el Órgano Interno de Control de la Universidad en comento”, no se encuentran al alcance del que suscribe.*

*Por otro lado, bajo el nombramiento que me fue otorgado por el Secretario de la Secretaria de la Contraloría del Estado de México, presento en mi carácter de Titular del Órgano Interno de Control en la UTN, al depender jerárquica y funcionalmente de la Secretaria antes nombrada, copia simple de la Cédula Profesional número 3347919, que me acredita como Licenciado en Derecho.*

*Respecto a:*

*“…****2.*** *“…A su vez, señalar en su caso, que personal de dicho órgano interno de control se encuentra contratado con horas semana mes y/o profesos de tiempo completo, señalando nombre completo, percepción mensual, fecha de contratación por parte de la Universidad y funciones que realizan…”*

*De conformidad con el Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, publicado en Gaceta de Gobierno el 30 de julio del 2012, el Órgano Interno de Control no cuenta con dicha información, ya que por su naturaleza no corresponde al objetivo de la Unidad Administrativa a su cargo; por otra parte, en términos del Artículo 3 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y de conformidad con dicho Manual, en su apartado correspondiente al Departamento de Recursos Humanos, es el área que tiene como objetivo: “Realizar las actividades de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal de la Universidad, así como establecer los mecanismos para el cálculo oportuno de sus remuneraciones y difundir sus derechos y obligaciones”.*

*En lo referente a:*

*“…* ***3.-****Solicito también se señale cuantas, cuales (incluyendo tipo y número de auditoría) ha realizado el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante el periodo de enero 2017 a marzo 2022, indicando la persona que las realizó, así como el número de observaciones determinadas, cuantas de estas fueron concluidas y cuantas se turnaron a responsabilidades o investigación…”.*

*La información requerida por el solicitante se encuentra debidamente publicada en la página web de la Secretaria de la Contraloría del Estado de México, en el apartado habilitado para la Información Pública de Oficio Mexiquense (IPMEX), que se encuentra en la siguiente liga* [*https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SECOGEM/art\_92\_xxviii/3.web*](https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SECOGEM/art_92_xxviii/3.web)

*(…)*

*Sobre:*

***4.*** *“Se me informe cuantas quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación, ha recibió el órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl durante el periodo del 01 de enero de 2017 al 23 de marzo de 2022, señalando el abogado responsable de su ejecución y el estado de cada una de estas actuaciones. En su caso el monto observado o aclarado y el servidor público sancionado o sujeto a investigación.*

*Se hace del conocimiento que, del 01 de enero de 2017 al 23 de marzo de 2022, este Órgano Interno de Control no recibió quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación”.*

1. Adjunto al oficio transcrito *supra* el **SUJETO OBLIGADO** entregó la imagen del anverso de la cédula profesional número 3347919, expedida por la Secretaría de Educación Pública, en favor del *C. Daniel Isaac Pérez Martínez*, que lo acredita como Licenciado en Derecho.
2. Así las cosas, podemos resumir la manifestación de incompetencia parcial emitida por el Jefe de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, así como la respuesta ofrecida por el Titular del Órgano Interno de Control de la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, a través de los siguientes puntos:
   1. Que la dependencia competente para poseer información relacionada con el personal administrativo adscrito a su área, es la propia **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, al ser ésta la encargada de su contratación.
   2. Que la información y evidencia documental a su alcance consiste en la generada y/o relacionada con el objetivo del Órgano Interno de Control.
   3. Que la información relacionada con las auditorías realizadas desde enero de dos mil diecisiete hasta marzo de dos mil veintidós, puede consultarse en el apartado de *Resultados de auditorías realizadas[[14]](#footnote-15)* en el portal IPOMEX del **SUJETO OBLIGADO**.
   4. Que del uno (01) de enero de dos mil diecisiete al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós, el Órgano Interno de Control de la universidad no recibió quejas o denuncias, actuaciones de oficios o resultados de auditorías turnados a investigación.
3. Por su parte, el ahora **RECURRENTE** presentó el recurso de revisión con número al rubro citado, en contra de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, y en el que señaló por agravios:
   1. La negativa de la información.
   2. La manifestación de incompetencia para poseer, generar o administrar la información del personal.
   3. Que existe una contradicción en la atención de la solicitud de información, pues previamente, mediante una solicitud diversa presentada a la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, el Titular del Órgano Interno de Control negó la información solicitada porque debía requerirse a la **Secretaría de la Contraloría**.
4. Posteriormente, en vía de informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** ratificó esencialmente su manifestación de incompetencia y respuesta original.
5. Así las cosas, se procederá a analizar el marco de competencia del **SUJETO OBLIGADO** para poseer, generar y/o administrar lo solicitado, así como la información proveída a través de la respuesta del Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a fin de establecer si se colmó el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE** o, si por el contrario, procede el ordenar la entrega de información.

**III. Del derecho de acceso a la información pública.**

1. Previo a analizar la procedencia de clasificación de la información realizada por el **SUJETO OBLIGADO**, debemos establecer los alcances de la información pública; por ende, se considera importante citar el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *“De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto, para darnos un mejor panorama:

***“XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios****,*** *correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;”*

(Énfasis añadido)

1. Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Así las cosas, conviene reiterar que artículo 6°, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, guardan una estrecha relación, puesto que los ordenamientos citados concurren refiriendo que **los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,** considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen, posean o administren.
3. Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.***

1. Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[15]](#footnote-16) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.
2. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.*

1. Como se ha señalado, los Sujetos Obligados deberán proporcionar toda la información que se encuentre en su posesión bajo los estándares más altos de transparencia **y máxima publicidad**.
2. Por lo anterior, es de referir que,el **Secretaría de la Contraloría**, al ser un Sujeto Obligado comprendido por la Legislación Local en materia de Transparencia, se encuentra obligado a hacer pública toda aquella información que genere, administre o posea.

**IV. De la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.**

1. El siete (07) de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se publicó en el Periódico Oficial *Gaceta del Gobierno*, la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, con personalidad jurídica y patrimonio propios[[16]](#footnote-17) y en cuyo artículo cuarto, desarrolla su objeto, a saber:

*“****Artículo 4.-*** *La Universidad de Nezahualcóyotl tendrá como objeto:*

***I.*** *Impartir educación tecnológica de tipo superior, incluyendo Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado, para la formación de recursos humanos, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país;*

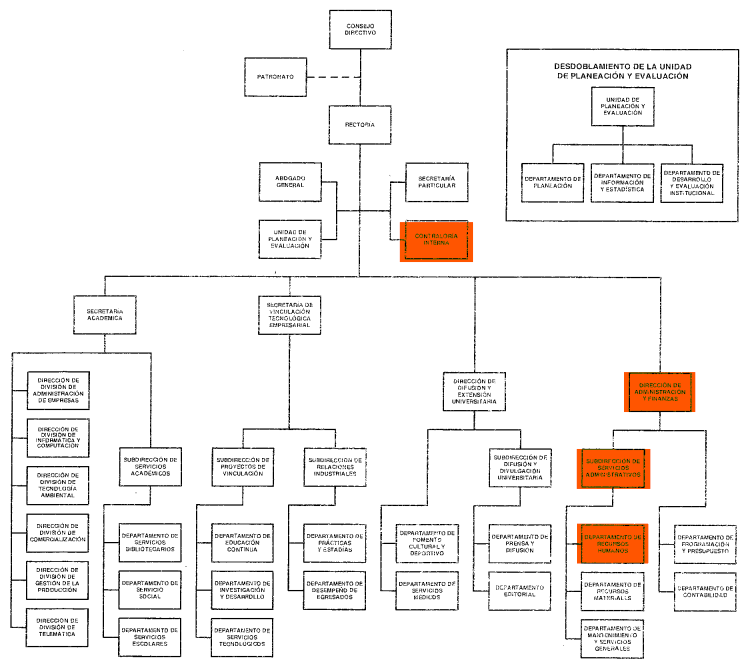
***II.*** *Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que se traduzcan en aportaciones concretas que fortalezcan la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como elevar la calidad de vida de la comunidad;*

***III.*** *Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;*

***IV.*** *Promover la cultura estatal, nacional y universal;*

***V.*** *Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social para la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.”*

1. De lo anterior podemos resumir que la universidad se encargará de impartir **educación tecnológica de tipo superior**, para la formación de recursos humanos con un alto nivel creativo para solucionar problemas, así como conocimiento de los últimos avances científicos y tecnológicos; por otro lado, también se encargará de **realizar investigaciones científicas y tecnológicas** que mejoren tanto la enseñanza tecnológica, como el aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.
2. Ahora bien, para asegurar el cumplimiento de su objeto, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl tendrá las siguientes autoridades y órganos:
   1. El Consejo Directivo
   2. El Rector;
   3. Los Secretarios que sean necesarios;
   4. Los Directores de División que determine el consejo;
   5. Los Directores de Centros que determine el consejo;
   6. El Patronato; y
   7. Los órganos colegiados que determine el consejo.
3. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido por el Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la institución de mérito contará con la siguiente estructura administrativa:



1. Resultando de especial interés la **Dirección de Administración y Finanzas**, la cual se encargará de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores relacionadas con la administración y aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la prestación de los servicios generales en apoyo a las actividades de la Universidad[[17]](#footnote-18).
2. A raíz de su objeto, la **Dirección de Administración y Finanzas** tendrá entre sus atribuciones, el regular y formular las normas, políticas y procedimientos de la **administración de los Recursos Humanos**, materiales y financieros de la institución educativa; conducir y coordinar las **relaciones laborales** entre el personal y las autoridades de la universidad; así como administrar las actividades relacionadas con la **selección, contratación, inducción, desarrollo y capacitación**, así como ratificar las deducciones, el **pago de remuneraciones** y demás prestaciones a que tiene derecho el personal adscrito a la institución[[18]](#footnote-19).
3. De acuerdo con lo visto en la estructura orgánica del **SUJETO OBLIGADO**, la **Dirección de Administración y Finanzas** contará con una **Subdirección de Servicios Administrativos**, la cual orientará su operación en coordinar y evaluar los programas, actividades y proyectos de **administración de los recursos humanos** y suministro de recursos materiales a las unidades administrativas, así como los servicios administrativos básicos y generales[[19]](#footnote-20).
4. La **Subdirección de Servicios Administrativos** se auxiliará de los siguientes Departamentos[[20]](#footnote-21):
   1. **Recursos Humanos**;
   2. Recursos Materiales; y
   3. Mantenimiento y Servicios Generales.
5. Es así como llegamos al **Departamento de Recursos Humanos**, el cual tendrá por objetivo el realizar las actividades de **reclutamiento**, selección, **contratación**, inducción, capacitación y desarrollo **del personal de la Universidad**, así como establecer los mecanismos para el cálculo oportuno de sus **remuneraciones** y difundir sus derechos y obligaciones[[21]](#footnote-22).
6. De acuerdo con lo establecido por el Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el **Departamento de Recursos Humanos** tendrá las siguientes funciones:

*“-* ***Llevar a cabo el proceso de*** *reclutamiento y* ***selección de aspirantes****, aplicando baterías de exámenes de conocimientos, de acuerdo a los perfiles del puesto vacante.*

*(…)*

*-* ***Integrar*** *y mantener actualizadas* ***las plantillas de plazas*** *e implementar mecanismos para el control de las mismas.*

*-* ***Elaborar los contratos y nombramientos del personal seleccionado****, verificar que éstos y la asignación de sueldos se ajusten a los tabuladores autorizados y a los lineamientos legales y administrativos establecidos.*

*-* ***Registrar y tramitar nombramientos y contratos****, altas, bajas, avisos de cambios de adscripción,* ***apertura y actualización de expedientes****, control de asistencia, vacaciones, movimientos y promociones del personal.*

*-* ***Elaborar la nómina para el pago oportuno de las remuneraciones al personal****; aplicar los descuentos por concepto de retardos y faltas; Impuesto Sobre la Renta; cuotas y aportaciones al ISSEMyM, y otros impuestos y derechos a cargo de los trabajadores o de la Universidad, así como mantener actualizados los registros en el módulo respectivo del sistema institucional de información y en el sistema de población cotizante.*

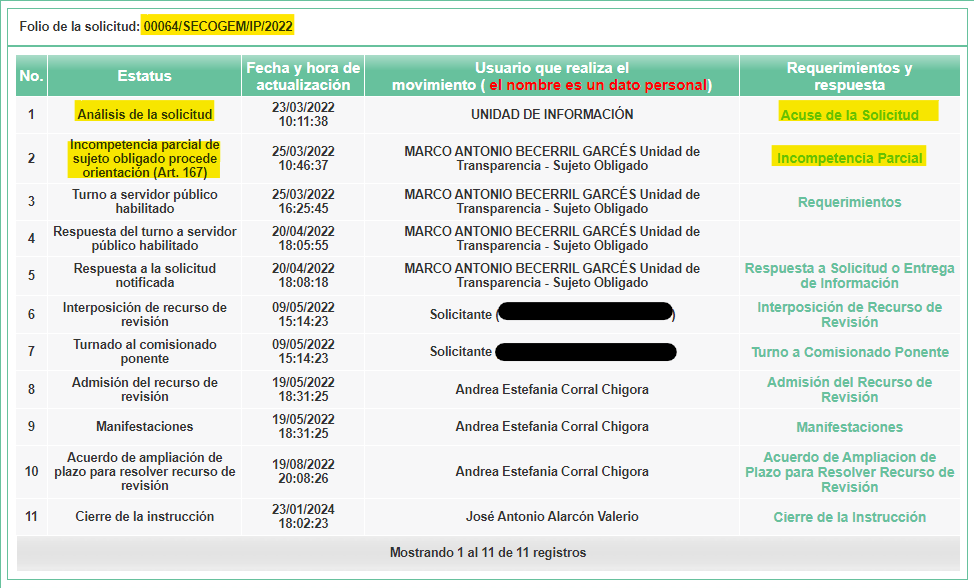
*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. De lo anterior podemos advertir que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a través de su **Departamento de Recursos Humanos**, se encargará de llevar un control de las plantillas de plazas, así como del proceso de contratación de personal y resguardo de expedientes laborales; del mismo modo, se encargará de la elaboración de la nómina para el pago oportuno de las remuneraciones.

**IV.I De la manifestación de incompetencia parcial del SUJETO OBLIGADO para poseer, generar o administrar información del personal adscrito al Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.**

1. Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
2. Para atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados contarán con un área denominada **Unidad de Transparencia**[[22]](#footnote-23), la cual será presidida por un Titular, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad **será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información** y tendrá la alta responsabilidad de verificar, en cada caso, que la misma no sea confidencial o reservada. Asimismo, contará con las facultades internas necesarias para **gestionar la atención a las solicitudes de información** en los términos de la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[23]](#footnote-24).
3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes:
   1. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
   2. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
   3. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; y
   4. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
4. Otros sujetos del proceso de atención a las solicitudes de información son los servidores públicos habilitados, quienes serán designados por el titular del Sujeto Obligado a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia[[24]](#footnote-25) y tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes[[25]](#footnote-26):
   1. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; y
   2. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia.
5. De tal manera que cada una de las áreas administrativas del **SUJETO OBLIGADO** deberá contar con un servidor público habilitado, quien será, a su vez, el enlace entre la Unidad de Transparencia y el área administrativa, y se encargará de buscar, localizar y proporcionar la información que se requiera a través de las solicitudes de acceso a la información.
6. Cabe mencionar que en los casos de **notoria incompetencia**, el procedimiento de acceso a la información se acorta considerablemente, pues las Unidades de Transparencia deberán hacer del conocimiento del Solicitante, dentro de los **tres días hábiles** posteriores a la presentación de la solicitud de información, sobre la incompetencia para poseer, generar y/o administrar la información que se requiera y, en su caso, orientarle sobre el o los Sujetos Obligados competentes[[26]](#footnote-27).
7. Establecido lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los puntos **I** y **II** del párrafo **52**, dentro del punto relativo a la *Atención de la solicitud de información* del presente estudio, tenemos que el particular requirió la siguiente información relacionada con el personal adscrito al Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl:
   1. Conocer si el personal adscrito al área administrativa se encuentra **titulado** y con **cédula profesional**, junto con los documentos que lo acrediten; y
   2. Del personal contratado por horas, semana, mes y tiempo completo, señalar su **nombre completo**, **percepción** mensual, **fecha de contratación** y **funciones** que realizan.
8. Por su parte, de las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** manifestó su incompetencia para poseer, generar y/o administrar la información antes señalada al **segundo día hábil posterior** a la presentación de la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022**, tal como se muestra en el siguiente extracto:



1. Luego entonces, este Organismo Garante reconoce que el **SUJETO OBLIGADO** manifestó su incompetencia para poseer, generar y/o administra la información relacionada con el personal adscrito al Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl dentro del plazo establecido por el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Por otro lado, en lo referente al señalamiento del ente competente para atender los requerimientos de mérito, el **SUJETO OBLIGADO** señaló a la propia Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl que, como hemos analizado, cuenta con un área administrativa que se encarga justamente de la administración de los recursos humanos, tópico que considera la apertu**ra y resguardo de expedientes de personal**, así como el **control de la plantilla de plazas** y **pago de remuneraciones**.
3. En consecuencia, este Organismo Garante considera que los requerimientos relacionados con información del personal adscrito al Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fueron **atendidos** en tiempo y forma por el **SUJETO OBLIGADO**.
4. Razón de lo anterior, se dejan a salvo los derechos del **RECURRENTE** para que, de considerarlo idóneo a sus intereses, presente una solicitud de información a la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, al ser ésta la dependencia competente para poseer, generar y administrar la información referente al personal adscrito a sus áreas administrativas, tales como nombres, grado de estudios, remuneraciones y funciones.

**V. De la Secretaría de la Contraloría.**

1. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado de México[[27]](#footnote-28), quien durará seis años en su encargo[[28]](#footnote-29) y tendrá entre sus facultades y obligaciones, las siguientes[[29]](#footnote-30):
   1. Conducir y administrar los ramos de la administración pública del gobierno del Estado, dictando y poniendo en ejecución las políticas correspondientes mediante las acciones públicas y los procedimientos necesarios para este fin; y
   2. Crear organismos auxiliares, cuya operación quedará sujeta a la ley reglamentaria.
2. Por su parte, el diverso 78 de nuestra Constitución Local establece que para el despacho de los asuntos que la Constitución le encomienda, el Ejecutivo contará con las dependencias y los organismos auxiliares que las disposiciones legales establezcan.
3. Del mandato constitucional anterior, nace la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, cuyo objeto es establecer las bases para la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal[[30]](#footnote-31).
4. Ahora bien, para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los diversos ramos de la Administración Pública, el numeral 23 de la Ley Orgánica en comento establece que auxiliarán a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, las siguientes dependencias:
   1. Secretaría General de Gobierno;
   2. Secretaría de Seguridad;
   3. Secretaría de Finanzas;
   4. Secretaría de Salud;
   5. Secretaría del Trabajo;
   6. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; VII. Secretaría de Bienestar;
   7. Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura;
   8. Secretaría del Campo;
   9. Secretaría de Desarrollo Económico;
   10. Secretaría de Cultura y Turismo;
   11. **Secretaría de la Contraloría**;
   12. Secretaría a del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible;
   13. Secretaría del Agua;
   14. Secretaría de las Mujeres;
   15. Secretaría de Movilidad;
   16. Consejería Jurídica; y
   17. Oficialía Mayor.
5. Resultando de especial interés para el presente asunto la **Secretaría de la Contraloría**, la cual será la encargada de **prevenir, detectar y, en el ámbito de su competencia, sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector auxiliar**, bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito y rendición de cuentas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.[[31]](#footnote-32).
6. De acuerdo con lo establecido por el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de Seguridad tendrá, entre sus atribuciones, las siguientes:

*“****Artículo 47.*** *La Secretaría de la Contraloría contará con las siguientes atribuciones:*

***I.*** *Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el* ***sistema de control, auditoría, evaluación y vigilancia de la Administración Pública****, en los términos de las disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia;*

*(…)*

***III.*** *Formular y expedir las* ***normas y criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos, sistemas y procedimientos de control de la Administración Pública Estatal****. La Secretaría discrecionalmente podrá requerir de las dependencias competentes, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de sus facultades de control;*

***IV.******Vigilar y supervisar****, por sí o* ***por conducto de los órganos internos de control****,* ***el cumplimiento de las normas de control y fiscalización****, en las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública Estatal;*

***V. Coordinar y supervisar el sistema de control interno****; establecer las bases generales para la fiscalización y realización de inspecciones y auditorías internas, transversales y externas en las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de carácter estatal, así como realizar las que se requieran en substitución o apoyo de sus propios órganos de control;*

*(…)*

***VII. Realizar*** *por sí o a solicitud de parte,* ***auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de carácter estatal****, con el objeto de controlar, examinar, fiscalizar y promover la eficacia y legalidad en sus operaciones y verificar de acuerdo con su competencia el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus programas, de manera trimestral los programas de mejora regulatoria, la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios, así como a las disposiciones contenidas en la Ley de Gobierno Digital; y formular, con base en los resultados de las mismas, las observaciones y recomendaciones necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas recomendaciones;*

***VIII. Inspeccionar y vigilar*** *directamente o a* ***través de los órganos de control*** *que las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública, cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la Administración Estatal;*

*(…)*

***X.******Fiscalizar*** *directamente o* ***a través de los órganos internos de control los recursos federales derivados de los acuerdos o convenios respectivos, ejercidos por las dependencias y fideicomisos de la Administración Pública Estatal****, así como proporcionar a la instancia competente la información sobre el destino y uso de dichos recursos;*

***XI. Vigilar*** *directamente o* ***a través de los órganos internos de control****, en la esfera de su competencia,* ***el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas adquiridas con el Ejecutivo del Estado****, solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen, y fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan, con el fin de mejorar las condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia;*

*(…)*

***XIV. Designar, coordinar, evaluar y remover a las personas titulares de los órganos internos de control de las dependencias, organismos auxiliares, fideicomisos de la Administración Pública*** *y de las unidades administrativas equivalentes de las empresas de participación estatal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas* ***quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría y a los titulares de las áreas adscritas de los citados órganos internos de control****; siempre promoviendo la igualdad de género y oportunidades en el acceso a la función pública;*

*(…)*

***XVIII. Recibir*** *directamente* ***o a través de los órganos internos de control, atender y dar curso y seguimiento a las denuncias*** *que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos de la Administración Pública, así como de las empresas de participación estatal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas, y en su caso, recurrir determinaciones de otras instancias legales en los términos que disponga la ley;*

***XIX. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, substanciar los procedimientos*** *correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, por sí, o* ***por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública*** *aplicando las sanciones en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal, así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como realizar investigaciones, inspecciones y supervisiones, a través de acciones encubiertas y usuario simulado, para verificar la legalidad, honradez, eficiencia y oportunidad de la prestación del servicio público. La Secretaría podrá ejercer la facultad de atracción de aquellos asuntos cuyo conocimiento corresponda a los órganos internos de control;*

*(…)*

***XXXI. Vigilar*** *directamente o* ***a través de los órganos internos de control la integración de los gabinetes*** *de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, garantizando la igualdad de género y oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, y en su caso, emitir recomendaciones a sus titulares;*

*(…)”*

(Énfasis y subrayado añadido)

1. De lo anterior se colige que **los Órganos Internos de Control** de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública **dependerán jerárquica y funcionalmente** de la **Secretaría de la Contraloría**; y ésta, a su vez, se encargará, a través de estos órganos, de aplicar los sistemas de control interno de los entes públicos.
2. Ahora bien, para el estudio, planeación y atención de los asuntos de su competencia, al frente de Secretaría estará una persona titular, quien se auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes[[32]](#footnote-33):
   1. Subsecretaría de Control y Auditoría;
   2. Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas;
   3. Dirección General de Contraloría y Evaluación Social;
   4. Unidad de Prevención de la Corrupción;
   5. Dirección de Auditoría y Control a Obra Pública;
   6. Dirección de Auditorías y Control de Programas;
   7. Dirección de Auditorías Especiales y Externas;
   8. **Dirección de Coordinación y Enlace de Órgano Interno de Control**;
   9. Dirección de Seguimiento y Apoyo Técnico;
   10. Dirección de Investigación;
   11. Dirección de Responsabilidades Administrativas;
   12. Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones;
   13. Dirección de lo Contencioso e Inconformidades;
   14. Coordinación Jurídica, de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia;
   15. Dirección de Políticas y Seguimiento de Sistemas en Contrataciones;
   16. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;
   17. Unidad de Planeación Seguimiento y Evaluación
   18. Coordinación Administrativa, y
   19. Órgano Interno de Control
3. Resultando de interés la **Dirección de Coordinación y Enlace de Órgano Interno de Control** pues, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, le corresponderá, entre otras, la atención de las siguientes actividades:
   1. **Coordinar a los órganos internos de control** en las dependencias y organismos auxiliares, en el cumplimiento de sus facultades;
   2. **Proponer las auditorías y acciones de control y evaluación, que realicen los órganos internos de control** para promover la modernización de los sistemas de control interno, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de objetivos institucionales y, promover una gestión eficiente en términos de transparencia, honradez y eficacia, con apego a la normatividad en las dependencias, organismos auxiliares y municipios en el ámbito de su competencia;
   3. **Coordinar a los órganos internos de control, en las auditorías y acciones de control y evaluación**, respecto al cumplimiento de la normatividad en la que sustentan su actuación, al uso, ejercicio y destino de los recursos públicos estatales o federales, transferidos a las dependencias, a los organismos auxiliares y a los gobiernos municipales; así como la ejecución de acciones derivadas de los programas, convenios o acuerdos respectivos;
   4. **Brindar asesoría y apoyo técnico** en materia de control y evaluación **a los órganos internos de control**, así como a las demás unidades administrativas que lo soliciten;
   5. **Coordinar y supervisar, a los órganos internos de control** o de los Comisarios, **el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas** adquiridas con las dependencias y organismos auxiliares, así como determinar las acciones de control y evaluación;
   6. **Supervisar** en el ámbito de su competencia, **las actividades de los órganos internos de control**, a fin de verificar que cumplan con las políticas, normas, lineamientos, procedimientos y demás disposiciones que al efecto se establezcan;
   7. **Vigilar en coordinación con los órganos internos de control** o Comisarios, **que las dependencias y organismos auxiliares observen en el ejercicio del gasto**, los lineamientos y criterios de transparencia, rendición de cuentas, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables;
   8. **Supervisar**, directamente o **a través de los órganos internos de control, el cumplimiento de la normatividad en los actos de entrega y recepción** de las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares;
   9. **Verificar, que los Órganos Internos de Control** en las dependencias y organismos auxiliares, **participen en la recepción de los trabajos ejecutados por contratistas**, que realicen las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, por conclusión de los trabajos, terminación anticipada o rescisión aplicables, en términos de las disposiciones legales correspondientes;
   10. Comunicar, a su superior jerárquico, los **informes de resultado de las auditorías y seguimientos practicados por los órganos internos de control** en las dependencias y organismos auxiliares; y
   11. **Coordinar que se remitan a los órganos internos de control** en las dependencias y organismos auxiliares, según corresponda, **los informes de auditoría y visitas de inspección que se hayan practicado, así como los resultados de auditoría o comunicados de otras autoridades**, si de los mismos se detectan presuntas responsabilidades de las personas servidoras públicas o infracciones de los licitantes, contratistas y proveedores, e integrar los expedientes y constancias correspondientes.
4. Así las cosas, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO**, a través de la **Dirección de Coordinación y Enlace de Órgano Interno de Control**, se encarga de mantener una comunicación directa con todos y cada uno de los **Órganos Internos de Control** de las dependencias y órganos auxiliares que conforman la administración pública estatal, propone las auditorías y acciones de control; supervisa sus actividades; les brinda asesoría y apoyo técnico; coordina y supervisa las actividades de control interno; y, recibe los informes de resultado de las auditorías y seguimientos.

**V.I. De las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.**

1. La Contraloría Interna (u Órgano Interno de Control) de la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl** tiene por objetivo el establecer y dirigir el Sistema Integral de Control y Evaluación, con el propósito de verificar que el desarrollo de las unidades administrativas de la universidad, en cuanto al manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, se ejecuten con eficacia y eficiencia, a fin de lograr los objetivos y metas institucionales[[33]](#footnote-34).
2. De acuerdo con el Manual General de Organización de la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, su Contraloría Interna tendrá entre sus funciones, las siguientes:
   1. **Inspeccionar los sistemas y procedimientos de Control Interno de la Universidad**, a través de las acciones de control y evaluación para promover su actualización permanente, **conforme** a **la aplicación de** las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y los **procedimientos de auditoría** de aplicación general; y
   2. **Analizar las evaluaciones y los informes que resulten de la aplicación de las** supervisiones y **auditorías**, así como **hacer las observaciones correspondientes y proponer las recomendaciones y medidas correctivas** que se requieran, tendientes a incrementar la eficiencia y la eficacia de las operaciones.
3. Una vez establecido lo anterior, conviene recordar que, a través de la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022**, el entonces **SOLICITANTE** requirió conocer cuántas auditorías ha realizado a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante el periodo comprendido de enero de dos mil diecisiete a marzo de dos mil veintidós, la persona que las realizó, el número de observaciones determinadas y, de éstas, cuántas fueron concluidas y cuántas se turnaron a responsabilidades o investigación.
4. Al respecto, no es ocioso mencionar que la naturaleza de lo solicitado se relaciona directamente con parte de las **obligaciones de transparencia común** que el **SUJETO OBLIGADO** está constreñido a publicar y difundir de manera permanente a la ciudadanía. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 92, fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que establece:

*“****Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*(…)*

***XXVIII.*** *Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;*

*(…)”*

1. Establecido lo anterior, en respuesta a la solicitud, el **SUJETO OBLIGADO** manifestó que la información se encontraba debidamente publicada en su portal IPOMEX; para ello, señaló una dirección de internet donde consultarla*[[34]](#footnote-35)*.
2. Así las cosas, resulta elemental señalar que el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establece que, cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información **en un plazo no mayor a cinco días hábiles**. **La fuente deberá ser precisa y concreta** y **no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible**.
3. Así las cosas, la Ley de la materia establece que, para el caso de que la información que requieran los particulares ya se encuentre disponible en medios electrónicos, el **SUJETO OBLIGADO** podrá hacerle saber al particular la fuente de consulta atendiendo dos consideraciones: **a)** la fuente se deberá hacer de su conocimiento dentro de los primeros **cinco días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de información**; y, **b)** la fuente deberá ser precisa, esto es, que **evite que el particular tenga que realizar una búsqueda en toda la información disponible en el portal que se señale**.
4. En el presente asunto, por cuanto hace al primer elemento para acreditar la entrega de información señalando una fuente de consulta, como fuera señalado en el apartado de *Antecedentes* de la presente resolución, la solicitud de información **00064/SECOGEM/IP/2022** se presentó el veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós, mientras que el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el veinte (20) de abril de dos mil veintidós, esto es, al décimo quinto día hábil posterior a la presentación de la solicitud de información, **encontrándose superado en exceso el plazo de cinco días establecidos en la Ley de la materia**.
5. Por otro lado, por cuanto hace a la fuente de consulta de la información, como ha sido reiterado, el enlace proporcionado por el **SUJETO OBLIGADO**[[35]](#footnote-36) nos dirige al Portal IPOMEX de la Secretaría de la Contraloría, específicamente al apartado denominado “*Resultados de auditorías realizadas”*, donde se advierte un listado de 67 Dependencias del Ejecutivo Estatal y Organismos Auxiliares; sin embargo, **no aparece la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**. Se adjunta la siguiente captura de imagen como referencia:



1. En consecuencia, este Organismo Garante encuentra conforme a derecho el **ordenar** al **SUJETO OBLIGADO**, en versión pública, la entrega de los documentos donde conste cuántas auditorías ha realizado a la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, durante el periodo comprendido del uno (01) de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós, la persona que las realizó, el número de observaciones determinadas y, de éstas, cuántas fueron concluidas y cuántas se turnaron a responsabilidades o investigación.

**V.II. De las quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación por parte del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.**

1. Finalmente, por cuanto hace al requerimiento relacionado con conocer cuántas quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación ha recibido el Órgano Interno de Control, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, desde el uno (01) de enero de dos mil diecisiete al veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós, junto con nombre del abogado responsable de su ejecución, el estado de cada una de estas actuaciones, el monto observado o aclarado (en su caso) y el nombre del servidor público sancionado o sujeto a investigación, el Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl reconoce, entre las funciones de la Contraloría Interna, las siguientes:

*“****205F 10400 CONTRALORÍA INTERNA***

*(…)*

***FUNCIONES:***

*(…)*

*-* ***Recibir, atender, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias*** *que se interpongan contra los servidores públicos de la Universidad, a través de los sistemas informáticos establecidos para este proceso.*

*-* ***Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos****, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.*

*(…)*

*-* ***Remitir*** *a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría,* ***los expedientes en los que los servidores públicos soliciten la abstención de ser sancionados****.*

*(…)*

*-* ***Fincar pliegos preventivos de responsabilidad y calificar la responsabilidad administrativa, resarcitoria****, pudiendo confirmarla, modificarla o cancelarla, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.*

*-* ***Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos****, de acuerdo con las disposiciones aplicables.*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. Así las cosas, en respuesta al requerimiento del particular, el Titular del Órgano Interno de Control de la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl**, informó al particular que *“del* [uno] *01 de enero de* [dos mil diecisiete] *al* [veintitrés] *23 de marzo de* [dos mil veintidós]*,* [el] *Órgano Interno de Control no recibió quejas o denuncias, actuaciones de oficio y resultados de auditorías turnadas a investigación”*.
2. Dicho lo anterior, es menester precisar queeste Órgano Garante no se encuentra facultado para dudar de la veracidad ni de la información que ponen los Sujetos Obligados a disposición de los solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto, máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se presume veraz, tan es así que queda registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).
3. Sustenta lo anterior el Criterio de Interpretación 31-10 emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:

*“****EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS NO CUENTA CON FACULTADES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS.*** *El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”*

1. De tal manera que, al referir el Titular del Órgano Interno de Control de la **Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl** que el área a su cargo no recibió quejas o denuncias, actuaciones de oficio ni resultados de auditorías turnadas a investigación durante el periodo solicitado, implica que nos encontramos ante un *Hecho Negativo*. Por ende, conviene destacar que el Pleno de este Organismo Garante, ha sostenido que ante la presencia de un *Hecho Negativo*, resultaría innecesaria una Declaratoria de Inexistencia en términos de los artículos 19, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y, ante un *Hecho Negativo* resulta aplicable la siguiente tesis:

***HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.*** *“Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por que invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración.”*

*Amparo en revisión 2022/61. José García Florín (Menor). 9 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.”*

1. Además, y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **SUJETO OBLIGADO** sólo proporcionará la información que obra en sus archivos, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos; motivo por el cual se **colma** el derecho de acceso a la información pública del particular en esta parte de la solicitud.

## **SEXTO. De la versión pública.**

1. La clasificación total o parcial de la información requerida, mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información. Como reiteradamente han dicho diversos Órganos Jurisdiccionales, ningún derecho es absoluto, aunque cualquier límite o restricción, para ser legítimo, debe reunir con tres requisitos: primero, debe de estar establecida en un ordenamiento legal, antes de su aplicación; debe de corresponder a un fin legítimo y ser estrictamente proporcional con el principio o valor que se pretende preservar. En este caso, la clasificación total o parcial de la información es un supuesto que tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante, la Ley General, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en adelante, la Ley Estatal, establecen, y agotar el procedimiento legalmente establecido, es precisamente lo que permite acreditar el cumplimiento de los otros dos requisitos.

**I. Requisitos previos.**

1. Los artículos 122 y 100 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que los sujetos obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación y que son los titulares de las áreas los encargados de clasificar la información. En consecuencia, son los titulares de las áreas que administran la información los que aprueban su clasificación y no el Comité de Transparencia. Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata (nombre, registro federal de contribuyentes, edad, fotografía, entre otros) que forme parte de algún documento o el documento que se pretende reservar (contrato, licencia, póliza, entre otros), señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).
2. Además, se debe señalar el procedimiento que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente, por el que se realiza dicha clasificación, a saber, cuando se atiende una solicitud de acceso a la información, porque lo determina una autoridad competente o porque se va a generar una versión pública para cumplir con sus obligaciones.
3. El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, según lo disponen los artículos 134 y 108 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados.

**II. Supuestos de clasificación.**

1. Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.
2. Por cuanto hace a la información que, por su naturaleza y/o características, pueda ser susceptible de ser reservada, el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establece lo siguiente:

*“****Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

***I.*** *Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

***II.*** *Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

***III.*** *Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

***IV.*** *Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

***V.*** *Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

***1.*** *Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

***2.*** *La recaudación de las contribuciones.*

***VI.*** *Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII.*** *La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*

***VIII.*** *Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

***IX.*** *Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

***X.*** *El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

***XI.*** *Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

1. Por su parte, los artículos 143 y 116 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial:

*“****I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública. “*

1. Mientras que los artículos 130 y 105 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe de realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.
2. Como consecuencia de lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información.
3. Al respecto, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así Como para la Elaboración de Versiones Públicas, por cuanto hace a la clasificación de la información, señalan lo siguiente:

*“****Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán utilizar los formatos contenidos en el presente Capítulo como modelo para señalar la clasificación de documentos o expedientes, sin perjuicio de que establezcan los propios.*

***Quincuagésimo primero.*** *La leyenda en los documentos clasificados indicará:*

***I.*** *La fecha de sesión del Comité de Transparencia en donde se confirmó la clasificación, en su caso;*

***II.*** *El nombre del área;*

***III.*** *La palabra reservado o confidencial;*

***IV.*** *Las partes o secciones reservadas o confidenciales, en su caso;*

***V.*** *El fundamento legal;*

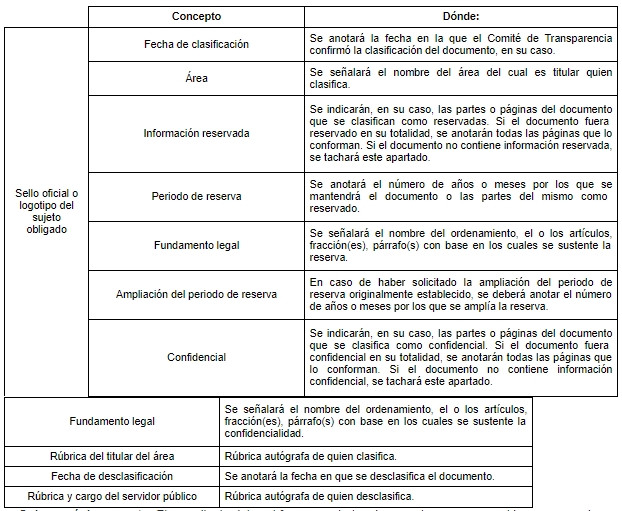
***VI.*** *El periodo de reserva, y*

***VII.*** *La rúbrica del titular del área.*

***Quincuagésimo segundo.*** *Los sujetos obligados elaborarán los formatos a que se refiere este Capítulo en medios impresos o electrónicos, entre otros, debiendo ubicarse la leyenda de clasificación en la esquina superior derecha del documento.*

*En caso de que las condiciones del documento no permitan la inserción completa de la leyenda de clasificación, los sujetos obligados deberán señalar con números o letras las partes testadas para que, en una hoja anexa, se desglose la referida leyenda con las acotaciones realizadas.*

***Quincuagésimo tercero.*** *El formato para señalar la clasificación parcial de un documento, es el siguiente:*

**

1. Una vez hecho lo anterior, se remite la información al Titular de la Unidad de Transparencia, con el acuerdo de clasificación correspondiente, para que sea sometido al conocimiento del Comité de Transparencia.

**III. La intervención del Comité de Transparencia.**

**a) Formalidades para emitir el Acuerdo de Clasificación.**

1. El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos 128 y 103 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, y la fracción III del numeral Segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en adelante los Lineamientos Generales, cuenta con las facultades para confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información que ha hecho el titular del área que administra la información. Por lo tanto, el Comité no aprueba la clasificación, sino que revisa lo que ha hecho el titular del área y confirma, modifica o revoca la decisión a través de un acuerdo.
2. Evidentemente, esta decisión implica una restricción a un derecho humano, por lo tanto, puede generar un agravio al particular y, en consecuencia, es necesario que el acto reúna con los requisitos elementales, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello, es decir, que cumpla con el principio de reserva de ley, por lo que no está demás señalar que el artículo 45 de la Ley Estatal, claramente señala que el Comité de Transparencia, legalmente facultado para emitir el acuerdo de clasificación, se integra por el Titular de la Unidad de Transparencia, el responsable del área coordinadora de archivos y el titular del órgano interno de control, integrado siempre por un número impar y que no debe de existir dependencia jerárquica entre sus integrantes. Cualquier otra composición del Comité puede generar vicios de legalidad de origen en el acto que restringe un derecho humano.
3. La decisión de confirmar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo aprobado por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia.

**b) Requisitos de fondo del Acuerdo de Clasificación.**

1. Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley nos aporta mayores luces para cumplir con dicha acreditación. En los artículos 131 y 105 segundo párrafo de la Ley Estatal y de la Ley General respectivamente, y el lineamiento sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales, al señalar que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.
2. De lo anterior se desprende que, para una correcta clasificación total o parcial, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.
3. Han sido vastos los estudios doctrinarios relativos a estos derechos fundamentales y al principio de legalidad en ellos contenidos; como ejemplo, el procesalista José Ovalle Fabela, en su obra “Garantías Constitucionales del Proceso”, refiere que *“(...) la garantía de fundamentación impone a las autoridades el deber de precisar las disposiciones jurídicas que aplican a los hechos de que se trate y que sustenten su competencia, así como de manifestar los razonamientos que demuestren la aplicabilidad de dichas disposiciones, todo lo cual se debe traducir en una argumentación o juicio de derecho. Pero de igual manera, la garantía de motivación exige que las autoridades expongan los razonamientos con base en los cuales llegaron a la conclusión de que esos hechos son ciertos, normalmente a partir del análisis de las pruebas, lo cual se debe exteriorizar en una argumentación o juicio de hecho (....)”*.
4. Por su parte, el intérprete judicial del país ha establecido una jurisprudencia[[36]](#footnote-37) respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *“La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”*

1. Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.
2. En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que, en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente por qué a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.
3. En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
4. Otro tipo de información confidencial constituyen los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a Sujetos Obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así lo define la fracción XXI del artículo 3 de la Ley Estatal.

**SÉPTIMO. Decisión.**

1. Dentro del estudio del asunto, se distinguió la competencia de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl para poseer, generar y administrar información de su personal administrativo; y, por otro lado, se identificó la competencia de la Secretaría de la Contraloría para poseer y administrar la información que generen los órganos de control interno de las dependencias e instituciones públicas, al ser jerárquicamente dependientes de aquélla.
2. Razón de lo anterior, se determinó procedente la manifestación de incompetencia parcial manifestada por el **SUJETO OBLIGADO** con respecto a la información del personal adscrito a la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Por su parte, se demostró que la liga de IPOMEX proveída en respuesta no mostraba los resultados de auditorías de la universidad de mérito, por lo que se ordenó su entrega. Y, por último, se determinó como un *Hecho Negativo* la manifestación del Titular de la Contraloría Interna, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, referente a que no se recibieron quejas, denuncias o turnaron observaciones a investigación durante el periodo solicitado por el particular.
3. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan parcialmente fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **07398/INFOEM/IP/RR/2022**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información número **00064/SECOGEM/IP/2022**.
4. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan parcialmente fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **07398/INFOEM/IP/RR/2022** en términos de los **Considerandos** **QUINTO** y **SÉPTIMO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta emitida por la **Secretaría de la Contraloría** a la solicitud **00064/SECOGEM/IP/2022** y se **ORDENA** entregar, vía Sistema de Acceso a la Información Pública Mexiquense (SAIMEX), en versión pública de ser procedente, los documentos donde conste la siguiente información referente al Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl al mayor grado de desagregación posible:

1. **Total de auditorías realizadas durante el periodo comprendido del uno (01) de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós, así como el nombre de la o el servidor público encargado de su realización, número de observaciones determinadas y, de éstas, cuántas fueron concluidas y cuántas se turnaron a responsabilidades o investigación.**

Para efectos de lo anterior se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII, y 132, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se ponga a disposición del **RECURRENTE**.

**TERCERO.** **Notifíquese** al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, vía SAIMEX, la presente resolución, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo **de diez días hábiles**, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO,** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese al **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de **EL RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “*El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.*” [↑](#footnote-ref-2)
2. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351. [↑](#footnote-ref-3)
3. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350. [↑](#footnote-ref-4)
4. Artículo 152, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-5)
5. Artículo 155, Ídem. [↑](#footnote-ref-6)
6. Artículo 154, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibídem. [↑](#footnote-ref-8)
8. “**Artículo 13.** El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.” [↑](#footnote-ref-9)
9. “**Artículo 9.** El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

   (…)

   **II. Eficacia:** Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   (…)” [↑](#footnote-ref-10)
10. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-11)
11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-12)
12. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-14)
14. [*https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SECOGEM/art\_92\_xxviii/3.web*](https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SECOGEM/art_92_xxviii/3.web) [↑](#footnote-ref-15)
15. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

    II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

    … [↑](#footnote-ref-16)
16. Artículo 1, Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl [↑](#footnote-ref-17)
17. Registro 205F12000, Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibídem. [↑](#footnote-ref-19)
19. Registro 205F12100, Ídem. [↑](#footnote-ref-20)
20. Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. [↑](#footnote-ref-21)
21. Registro 205F12101, Ídem. [↑](#footnote-ref-22)
22. Artículo 50, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-23)
23. Artículo 51, Ídem. [↑](#footnote-ref-24)
24. Artículo 58, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-25)
25. Artículo 59, Ídem. [↑](#footnote-ref-26)
26. Artículo 167, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-27)
27. Artículo 65, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. [↑](#footnote-ref-28)
28. Artículo 67, Ídem. [↑](#footnote-ref-29)
29. Artículo 77, Ídem. [↑](#footnote-ref-30)
30. Artículo 1, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. [↑](#footnote-ref-31)
31. Artículo 46, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. [↑](#footnote-ref-32)
32. Artículo 4, Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría. [↑](#footnote-ref-33)
33. Registro 205F10400, Manual General de Organización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. [↑](#footnote-ref-34)
34. https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SECOGEM/art\_92\_xxviii/3.web [↑](#footnote-ref-35)
35. https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/SECOGEM/art\_92\_xxviii/3.web [↑](#footnote-ref-36)
36. Jurisprudencia 203143, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época. [↑](#footnote-ref-37)